



Vol. 7, No. 1, Fall 2009, 485-490

www.ncsu.edu/project/acontracorriente

Reseña/Review

Jo-Marie Burt, *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009.¹

Entre dos fuegos: Dictadura y subversión en el Perú, 1980-2000

José Ragas

University of California—Davis

La incomodidad que la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) provocó en algunos sectores políticos y castrenses fue una señal anticipada e inequívoca de lo difícil que sería asimilar lo sucedido durante el conflicto armado interno que asoló al Perú entre 1980 y 2000. De acuerdo con este documento, en dicho periodo murieron cerca de setenta mil personas, entre fuerzas del orden, subversivos, civiles, ancianos, menores de edad y otros grupos sociales. Pero además de la cifra estimada de víctimas,

¹ La versión original apareció en inglés como: *Political Violence and the Authoritarian State in Peru. Silencing Civil Society* (New York: Palgrave Macmillan, 2007).

que fue duramente cuestionada, uno de los aspectos que más incomodidad causó fue el hecho de que el Informe Final distribuía la responsabilidad por estas mismas muertes entre las Fuerzas Armadas y los grupos subversivos. Así, el grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) fue señalado como el principal responsable de los asesinatos, los cuales habían sido cometidos de manera poco menos que inhumana: matanzas colectivas y ejecuciones de autoridades y civiles, estos últimos asesinados indistintamente con balas, piedras o dinamita. Pero compartiendo la culpa por estas muertes se hallaba también el Estado y su brazo operativo militar: las Fuerzas Armadas.

La similitud de las prácticas del Estado con la subversión es uno de los temas que más polémica ha causado en los últimos años y que han llevado a ciertos sectores políticos a enfilarse contra los ex integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y contra todo aquel que se proclame defensor de los Derechos Humanos. El reciente juicio y condena a treinta años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori trajo de vuelta aquellos fantasmas, y si las audiencias de la CVR nos permitieron escuchar a quienes habían sufrido en carne propia la violencia, el juicio a Fujimori puso en el estrado a la otra parte, es decir, a quienes diseñaron la política contrasubversiva y la ejecutaron sin miramientos. Pronto se entabló una lucha en el espacio público entre dos formas de cerrar este capítulo trágico de la historia peruana. Por un lado, quienes pretendían hacerlo a través de la impunidad, y por otro, quienes buscaban la aplicación de un castigo a los responsables, desde la consigna de que el conocimiento de nuestro pasado y la sanción a los responsables de las violaciones de derechos humanos nos podrían evitar tener que repetirlo.

El reciente libro de la profesora Jo-Marie Burt nos lleva precisamente de regreso al momento en que se desarrolló esa sangrienta batalla entre las fuerzas del orden y los grupos subversivos. Tal como lo demuestra la autora, SL se aprovechó de la histórica debilidad del Estado, el cual después de doscientos años de vida republicana no había podido garantizar su presencia en la totalidad del territorio que aspiraba controlar. Pero el problema no era solo la ausencia del Estado sino la existencia de *zonas grises*, como denomina la autora a los espacios abandonados por los gobiernos y que eran los

más propensos a ser ocupados por organizaciones políticas con cierto margen de capacidad operativa, como efectivamente lo hizo SL.

El examen de estas *zonas grises* en las zonas marginales de la capital (las barriadas) permite elaborar a la autora la fascinante y desconcertante propuesta que recorre su libro. Para Jo-Marie Burt, SL—en tanto organización política con objetivos específicos de conquista del poder—no solo desplegó una escalada de terror contra el Estado y la sociedad peruanos sino que también supo insertarse de manera efectiva en organizaciones formales de política local, logrando así reemplazar la autoridad estatal en espacios donde este era inexistente o se había replegado. De ahí que no sorprenda descubrir que la presencia de SL en determinadas partes del país no se desarrolló bajo coacción y violencia indiscriminada sino que gozó de aprobación y consenso. El fino análisis de Burt echa por tierra nuestras presunciones iniciales de una organización terrorista fanática, controlada por dirigentes irracionales y operada por intermediarios sin capacidad de infiltración, cuyos brutales métodos provocaban el rechazo unánime de la población.

Por el contrario, la estrategia desplegada por SL abarcó diversos frentes. Burt nos descubre a una organización que supo cómo insertarse en escenarios variados y mimetizarse hasta confundirse ante los ojos del enemigo. Al hacerlo, cumplían con una de las máximas maoístas según la cual el pueblo era el agua y el ejército guerrillero el pez que debía aprender cómo moverse en ese medio. El trabajo de campo que la autora realizó en Villa El Salvador es de particular importancia para entender la lógica de incursión tanto de los grupos subversivos como del Estado. Burt procede a colocar frente a frente a las dos organizaciones que aspiraban, la una, a obtener el poder e instaurar una dictadura de corte comunista, y la otra, a retener la soberanía que le correspondía como un régimen democrático. Al despojar a estos dos contendientes de todo atributo moral predeterminado, la autora examina las dinámicas y los medios de los que se valieron para combatirse mutuamente e intentar así la eliminación del otro. Lo que queda demostrado es que el Estado peruano fue capaz de descender al mismo nivel de violencia y demencia bélica para acabar con el terrorismo, aun cuando esto implicara combatirlo con sus mismas armas y provocar la muerte de quienes había jurado proteger.

Una vez aplacada la ola subversiva, el régimen fujimorista pasó a utilizar el temor frente a un posible retorno del terrorismo, al tiempo que la corrupción y la coerción eran usadas como estrategias para asegurarse la continuidad de manera indefinida. No obstante, la incapacidad del gobierno para superar problemas estructurales como la pobreza—frente a la cual solo se respondió con programas alimentarios que buscaban satisfacer fines proselitistas—, le pasó la factura en las encuestas. Por otro lado, los medios se volvieron más críticos al mismo tiempo que sectores aislados de la sociedad civil confluyeron en su intento por combatir la perpetuación del gobierno en el poder. El quiebre también provino desde arriba, cuando una de las patas que sostenía la mesa—las Fuerzas Armadas—traicionó el triunvirato que compartía con Montesinos y Fujimori: el Servicio de Inteligencia Nacional y el Poder Ejecutivo, respectivamente.

El libro pone énfasis en la descomposición del régimen como consecuencia de sus pugnas internas a partir de 1997, en un contexto de crisis internacional y los efectos del Fenómeno del Niño. Si bien las protestas permitieron consolidar a la hasta entonces desarticulada sociedad civil, fue la difusión del video en el que aparecía Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista lo que marcó el fin de la alianza: Fujimori se vio obligado a desactivar el SIN y Montesinos debió huir. Al no ser capturado, la posición misma de Fujimori se volvió endeble, por lo que no le quedó más remedio que fugar del país y ponerse a buen recaudo en Japón. Solo en los años siguientes se pudo capturar a Montesinos y Fujimori y llevarlos ante los tribunales, en lo que ha sido el juicio más importante de la historia peruana desde su nacimiento como república hace casi doscientos años.

Lo ocurrido entre 1997 y 2001 guarda mucha similitud con lo que sucedió en los años 1975-1980, cuando las protestas urbanas fueron un factor importante para que el Gobierno Militar de ese entonces decidiera devolverle el poder a los civiles. Pasada la euforia y el periodo de transferencia (Belaúnde Terry en 1980, gobierno de transición en 2000), los gobiernos posteriores no pudieron canalizar de manera adecuada las demandas de los sectores que se habían levantado contra la dictadura previa. Por ello, considero que no se podría calificar a la sociedad civil post-dictadura como débil y fragmentada (390),

calificativos que sí podrían recaer sobre el sistema partidario posterior al fujimorismo, que incluye los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García Pérez (2006-presente), y que han visto aparecer protestas de diferente intensidad, especialmente en regiones apartadas del país—ejemplos históricos de las *zonas grises* a las que hace referencia el libro: el Altiplano (Ilave) en 2004 y la selva central (Bagua) en 2009.²

Una conclusión que se desprende del libro es que el Estado debiera aprovechar las coyunturas post-dictadura para crear un pacto con la sociedad civil. *Violencia y autoritarismo en el Perú* no pretende erigirse como una obra con una moraleja o receta acerca de qué debería o no hacer el gobierno para conectarse con la sociedad civil y obtener legitimidad. El propósito de Burt ha sido diseccionar al Estado peruano de los últimos treinta años y mostrarnos, desde dentro, los límites y el potencial del mismo para integrar a la sociedad civil en su seno, ya sea por medio de la persuasión—lo cual no siempre le ha reportado resultados favorables, al menos en el corto plazo—como por la coacción, que fue lo que ocurrió durante los años noventa. Al optar por la coacción extrema y el terror, el Estado fujimorista descendió al nivel de su principal contendor, la subversión, y redireccionó las prioridades de todo el gobierno en función de obtener apoyo para la prolongación de su mandato. En su propósito, intensificó la violencia y provocó una fractura social de la cual aun los peruanos no logran recuperarse.

Violencia y autoritarismo en el Perú es un libro que responde a la necesidad por entender la lógica de cómo se desarrolló la subversión en el Perú y cómo esta fue combatida desde dos frentes: el Estado y la sociedad civil. En esta triangulación, el Estado no siempre fue un intermediario eficaz y muchas veces se deslizó al bando de los agresores, en su doble esfuerzo por acabar con el terrorismo y aplacar cualquier resistencia por parte de la población civil. Burt nos entrega una

² Sobre los movimientos políticos y sociales de los últimos años, el texto editado por Martín Tanaka y Romeo Grompone es imprescindible: *Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: las protestas sociales en el Perú actual* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009). Para el caso Ilave, que conmocionó al país por la forma cómo un grupo de pobladores asesinó al alcalde democráticamente electo, véase el reciente libro de Ramón Pajuelo. “No hay ley para nosotros...”. *Gobierno local y conflicto en el Altiplano: el caso Ilave* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009).

narración coherente y profunda, que no pierde de vista a la gente común, la cual había sido convertida por muchos estudios en cifras y cuadros inermes, que de ninguna manera pueden reflejar el horror y la desesperación de los peruanos que se vieron en medio de dos maquinarias de guerra.